JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C. diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro

REF:	Tutela
RAD.	11001310302720240006900
DE	Aldemar Chaustre Ortíz, en representación de su menor hijo David Alejandro Chaustre
VS.	Dirección Sanidad Militar del Ejército DISAN

Procede el Despacho a resolver lo pertinente a la acción de tutela formulada por el señor **ALDEMAR CHAUSTRE ORTIZ**.

ANTECEDENTES

A través del escrito que fuera introductorio de la presente acción, se pretende se tutele en favor de su hijo menor David Alejandro Chaustre, el derecho constitucional a la salud, vida digna, derecho de los niños presuntamente vulnerados, y en concreto solicita que se ordene a la accionada **DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR** se asignen las citas al especialista en nutrición, neurología, pediatría y que se continúe de manera oportuna el tratamiento integral, conforme a los siguientes hechos que se sintetizan así:

Al menor DACH por su condición de discapacidad, después de cada cita con los especialistas, establecen nuevos controles como: neuropediatría, epileptólogo, nutricionista, fisioterapeuta, pediatría y otros, de acuerdo con la necesidad del diagnóstico o quebrantos de salud que vaya presentando, y es ahí donde se ha venido presentando constantemente los obstáculos de lograr las citas médicas por falta de agenda disponible, causando retraso al cumplimiento de las fechas ordenadas por los galenos.

Notificado el extremo accionado del auto admisorio de fecha 12 de febrero, sin que a la fecha haya hecho pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la tutela como un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos fundamentales constitucionales cuando éstos se vulneren o amenacen por la acción o la omisión de las autoridades públicas o por particulares en algunos casos especiales.

A la luz de este mandato y del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que la reglamenta, permite advertir que el ejercicio de la tutela no es absoluto, está limitado por las causales de improcedencia allí contenidas, en especial la que establece que no es viable cuando existan otros mecanismos judiciales de defensa. Pero aún si el reclamo es susceptible de poder tramitarse por la vía judicial ordinaria, de manera excepcional la tutela procede siempre que se interponga como mecanismo transitorio, ante el padecimiento de un perjuicio irremediable, que debe acreditarse o poder apreciarse por el juez de tutela con base en las pruebas que en tal sentido se alleguen con la solicitud.

Para el caso que ahora nos ocupa, es importante señalar que la prestación de los servicios médicos para los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentra regulada por la Ley 352 de 1997 y el Decreto N° 1795 de 2000, cuyo objeto es brindar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, así lo señala el artículo 5° de la Ley 352 de 1997.

Ahora bien, como es sabido, el sistema de seguridad social en salud, tanto en el régimen general como en los especiales, se encuentra orientado por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, pues lo que se pretende es que todos los habitantes del territorio nacional tengan acceso a los servicios de salud en condiciones dignas.

El artículo 49 de la Constitución dispone que *“la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”* A su turno, el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 prescribe que *“el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, y “comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud.”* Al mismo tiempo, el artículo en cita señala que *“el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.”*

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que del carácter fundamental del derecho a la salud se concreta en la prestación de los servicios propios del Sistema de Seguridad Social en Salud, los cuales se enmarcan en los principios previamente aludidos. En lo que toca a los parámetros para la prestación del servicio, en Sentencia T-010 de 2019, la Corte sostuvo que:

“el derecho fundamental a la salud no puede ser entendido como el simple goce de unas ciertas condiciones biológicas que aseguren la simple existencia humana o que esta se restrinja a la condición de estar sano. Por el contrario, tal derecho supone la confluencia de un conjunto muy amplio de factores de diverso orden que influye sobre las condiciones de vida de cada persona, y que puede incidir en la posibilidad de llevar el más alto nivel de vida posible.”

Igualmente ha precisado que el derecho a la salud adquiere relevancia tratándose de la protección de infantes y adolescentes y ha sostenido que el derecho a la salud de este grupo poblacional, y con lo señalado por el artículo 44 de la Carta Política, *“es un derecho fundamental prevalente y por tanto incondicional y de protección inmediata.”*¹ postura que tuvo efectos en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que en su artículo 11 dispuso: *“la atención de niños, niñas y adolescentes (...) personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica.”*

De igual forma, la Corte ha puesto de manifiesto que en el marco de la gestión y la prestación del servicio de salud a favor de los niños, todos los agentes que intervienen en él, tanto públicos como privados, *“deben (i) orientarse no solo al*

¹ Corte Constitucional. Sentencia SU-819 de 1999.

*mantenimiento del mayor nivel de salud posible, como para la generalidad de la población, sino que deben perseguir un desarrollo infantil efectivo, como condición para el ejercicio de sus demás garantías constitucionales y (ii) atender en cualquier caso el interés superior, como presupuestos para la consolidación de la dignidad humana del niño*². viéndose reforzado cuando el niño que reclama la atención del sistema de salud ha sido diagnosticado con una condición de discapacidad, los art 13, 44 y 47 de la Constitución.

Al respecto, la Corte ha sostenido que: *“la protección especial que merecen los niños debe ser reforzada cuando se trata de menores de edad que presentan algún tipo de discapacidad física o mental, [pues] se ven expuestos a una mayor condición de vulnerabilidad, motivo por el cual deben recibir un amparo prioritario, pronto y eficaz”*.³

Del caso que es materia de estudio, tenemos que la Dirección de Sanidad Militar DISAN, guardó silencio cuando se les corrió traslado de la acción, de esta manera, corresponde señalar que, ante la falta de respuesta por parte de la accionada, es procedente dar aplicación a la presunción de veracidad.

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dispone que las entidades accionadas tienen la obligación de rendir los informes que les sean solicitados en desarrollo del proceso de tutela dentro del plazo otorgado por el juez, por lo que, si dicho informe no es rendido dentro del término judicial conferido, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial crea conveniente otra averiguación previa. Al respecto, esta corporación en la sentencia T- 661 de 2010 señaló:

“En este último evento, se decretarán y practicarán las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de fondo, pues como se ha señalado en otras oportunidades no puede el juez de tutela precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, sino que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante la adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente de los hechos y aspectos jurídicos sobre los cuales habrá de pronunciarse.”

En tal sentido, obsérvese que la presunción de veracidad es concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas.

Adicionalmente, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (artículos 2°, 6°, 121, 123 inciso 2° de la Constitución Política).

² Sent. T-207 de 2020.

³ Sent. T-390 de 2020, reiterada en Sent. T-322 de 2012 y T-705 de 2017.

En el caso bajo estudio, se encuentra que al menor David Alejandro Chaustre, en su condición de discapacidad, los especialistas le establecieron nuevos controles en: nutrición, neurología, pediatría, y que también se extiende los controles de acuerdo con la necesidad del diagnóstico o quebrantos de salud que vaya presentando.

Así las cosas, el Despacho observa que por su edad y por su especial estado de salud al menor debe otorgársele las citas de control que los médicos especialistas le asignen y en el término indicado por éstos, sin la dificultad que la accionada indique tener respecto agendamiento para atender las citas médicas de rigor que en adelante se otorguen. Por ello, ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que, en lo sucesivo se otorguen oportunamente las citas, indicándose que debe en este momento conceder citas para los siguientes especialistas: nutrición, neurología, pediatría.

De tal manera, considera este Despacho Judicial la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos del accionante a la salud, vida digna, orden constitucional que se ordenará.

En mérito de lo expuesto, **JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

Primero: **AMPARAR** los derechos fundamentales a la salud y vida digna del menor David Alejandro Chaustre, representado por su padre **ALDEMAR CHAUSTRE ORTIZ**,

Segundo: **ORDENAR** a la Dirección de **SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL DISAN** que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ejecutoria de este fallo conceda las citas de los especialistas en nutrición, neurología y pediatría, y en lo sucesivo atender las citas médicas de rigor que en adelante se le otorguen.

Tercero: La entidad accionada deberá informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que debe dar a esta providencia.

Cuarto: **NOTIFÍQUESE** esta providencia a las partes e interesados según el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Envíese el expediente digital a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991, si no fuere impugnada la presente decisión.

NOTIFIQUESE, CUMPLASE
LA JUEZ,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **505baf85ea3a0e4b670491ec07eb987a66daa6f04879decf8a52fb0fef74476f**

Documento generado en 19/02/2024 10:14:09 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>